

Iquique, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

VISTO Y OIDO:

Se llevó a efecto ante esta Corte de Apelaciones, en sala integrada por la Ministro Titular Sra. Marilyn Fredes Araya, el Ministro Interino Sr. Moisés Pino Pino y la Abogada Integrante Sra. Carolina Hermans Bohm, audiencia para conocer del recurso de nulidad deducido por el abogado don Alejandro Hernán Azúa Vega, por parte de la demandada ISS Servicios Integrales Ltda., en contra de la sentencia dictada el 20 de octubre de 2020 por la Juez doña Marcela Díaz Méndez, en causa RUC 2040292651-2, RIT M-303-2020, que acogió la demanda por concepto de bono de instalación, devolución del descuento de cuota por préstamo solicitado a Caja de Compensación Los Andes, y que condenó en costas a la demandada.

Compareció virtualmente en estrados, el abogado don Alejandro Hernán Azúa Vega, por el recurrente, y el abogado don Humberto Patricio Fuentes Díaz, por la recurrida, quienes detallaron los argumentos en que basan sus pretensiones, quedando dichas intervenciones registradas en el sistema de audio respectivo.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurso de nulidad se funda en la causal prevista en la letra c) del artículo 478 y subsidiariamente en el artículo 477, ambos del Código del Trabajo.

Señala el recurrente, en síntesis, en cuanto a la primera causal invocada, que no se cuestionan los hechos establecidos por el tribunal, sin embargo, el vicio que se denuncia discurre en la errada naturaleza jurídica que el tribunal atribuyó a los hechos que se tuvieron por acreditados.

Precisa que conforme el motivo octavo del fallo, los hechos allí establecidos, permitieron al tribunal calificarlos como una cláusula tácita y, consecuentemente, determinar que el bono de instalación por la suma de \$250.000 era un derecho adquirido por el trabajador demandante. Añade que el referido considerando estableció los siguientes hechos que le permitieron a la juzgadora arribar a la conclusión jurídica de existencia de una cláusula tácita y, por tanto, un



derecho adquirido en favor del trabajador para percibir el bono de \$250.000: a) “existen anexos de contrato suscritos por las partes respecto de periodos acotados para percibir dicho bono, esto es, entre los meses de junio y agosto, septiembre y octubre de 2019”; b) “que habiéndose pagado el mes de noviembre de 2019, (...) la demandada no realizó descuento alguno, respecto de dicho pago en los meses venideros ni tampoco expresa las razones por las cuales dicho pago fue efectuado sin mediar descuento alguno, aunque advierte que se produjo dicho pago por error”; c) “a la luz de los anexos de contrato suscritos por las partes, anteriormente, los que en su cláusula segunda sólo indican que se pagará dicho bono bajo “expresa condición que don Francisco Navia Reyes, se encuentra realizando las labores de administrador de contrato en la instalación de hospital Iquique...” Y agrega que “El trabajador tiene perfecto conocimiento y acepta desde ya que este bono quedará sin efecto inmediato en caso que deje de desempeñar la función antes referida, significando de pleno derecho la pérdida ipso facto de dicha bonificación, sin que ello suponga menoscabo para ningún efecto legal”.

Alude que tales hechos permitieron a la sentencia, en el mismo considerando octavo determinar la existencia de una cláusula tácita y, por tanto, que el bono de instalación era un derecho adquirido, no obstante la vigencia establecida en los anexos de 1 de junio y 1 de septiembre de 2019, los cuales transformaban al actor en acreedor de dicho bono más allá de la vigencia establecida en dichos anexos.

Detalla que como indica el fallo, los referidos anexos, otorgaban un plazo acotado de vigencia para percibir dicho bono, es decir entre junio y octubre de 2019. Refiere que en los anexos, se estableció además otras condiciones para ser acreedor de dichos bonos, como es tener la calidad administrador de contrato que tiene su representada con el Hospital de Iquique.

Puntualiza que del análisis de ambos hechos asentados, el actor sólo tendría derecho a aquel bono, en palabras de la sentenciadora, en “acotados períodos” y, siempre y cuando, detente la calidad de administrador de contrato en el Hospital de Iquique.



Manifiesta que si bien, se pagó erradamente el bono de instalación en noviembre de 2019, cuando la vigencia de los anexos citados, habían expirado, y no se realizó gestión para su devolución, entiende que aquél acto no puede, bajo ningún respecto, permitir concluir que estamos en presencia de una cláusula tácita y con ello un derecho adquirido en favor del trabajador respecto al bono de instalación. Destaca que se trata de un solo mes en que se pagó –de manera errada- un bono que no le correspondía al actor. Afirma que dicho acto aislado no reúne las características necesarias para constituir una cláusula tácita.

Reclama que según ha señalado la Dirección del Trabajo (Dictamen ordinario N° 4864/275 de 20 de septiembre de 1999), para estar en presencia de una cláusula tácita y, con ello, de un derecho adquirido en favor del trabajador, deben verificarse como elementos: a) reiteración en el tiempo de una determinada práctica que otorgue, modifique o extinga algún beneficio, regalía o derecho de la relación laboral; b) voluntad de las partes; c) que la modificación no puede referirse a materias de orden público ni tratarse de los casos en que legalmente se exige que las modificaciones al contrato se estipulen expresamente.

Alega que los requisitos establecidos por la jurisprudencia administrativa, no se cumplen, por cuanto no existe reiteración en el tiempo, respecto al pago del bono de instalación fuera de los términos indicados en los anexos de 1 de Junio y 1 de septiembre de 2019.

Sostiene que si su representada pagó el bono fuera del marco contractual vigente, lo hizo sólo una vez, por lo que aquello se opone, al requisito de permanencia o reiteración en el tiempo que exige la jurisprudencia administrativa.

Añade que tampoco se cumple el requisito de un actuar inequívoco de parte del empleador, en orden a modificar las estipulaciones que regían el devengo del bono de instalación, por cuanto, nuevamente, sólo existe un acto realizado por su representada, de pagarlo fuera del marco de los anexos, el que además siempre fue sindicado como un error. Precisa que la



circunstancia de no haberse descontado dicho pago de lo no debido, no modifica la conclusión anterior, por cuanto tampoco se encuentra aparejada con actos de reiteración o una manifestación inequívoca de parte del empleador de su existencia. Añade que por el contrario, la manifestación inequívoca que ha existido, es que el empleador dejó de pagar dicho bono desde diciembre de 2019 hasta el día de la terminación de su contrato de trabajo, precisamente porque estaba fuera del marco establecido en los anexos de Junio y septiembre de 2019.

Sostiene que cuando la sentenciadora establece que ha existido una cláusula tácita y, con ello, un derecho adquirido del trabajador para percibir el bono de instalación, no obstante estar fenecida la vigencia de los anexos, ha errado en la calificación jurídica de los hechos establecidos en el fallo, siendo necesaria su alteración, en orden a establecer que no ha existido una cláusula tácita que permita entender que el actor, por el sólo hecho de ser administrador del hospital de Iquique, tiene derecho a percibir el bono de instalación.

Expone en cuanto a la causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo en relación a los artículos 432 del Código del Trabajo en concordancia con el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil; que como consta el fallo atacado, la demanda fue rechazada en aquél acápite que pretendía la restitución del descuento por la incorrecta rendición del fondo fijo; Así las cosas, reclama que al no ser su parte totalmente vencida, no correspondía la condena en costas.

Pide en definitiva se acoja el recurso, declarando la nulidad del fallo recurrido, dictando sentencia de reemplazo conforme a Derecho, en la cual se resuelva rechazar en todas sus partes la petición de condena del bono de instalación por los períodos de diciembre de 2019 a mayo de 2020, al no tener derecho el actor a percibirlo, todo ello con expresa liberación de la condena en costas a su representada.

SEGUNDO: Que para la resolución del presente recurso de nulidad, cabe considerar que este medio de impugnación extraordinario persigue invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la



sentencia definitiva o sólo esta última, según sea el caso, si en su dictación concurre alguna de las causales señaladas en la ley, en relación con ciertos vicios capaces de generar nulidad y que influyan en lo dispositivo del fallo, que guardan relación con la infracción de derechos y garantías constitucionales o legales, pero no con la determinación de los hechos efectuada por el sentenciador en el fallo recurrido, dado que tal especificación fáctica y su valoración corresponde privativamente al tribunal que conoce del proceso, bajo sanción de vulnerar los principios esenciales del juicio oral, especialmente aquel relacionado con la inmediación y que impide que otros juzgadores que no sean aquellos que han intervenido en el juicio hagan apreciación de las probanzas rendidas durante el mismo.

TERCERO: Que por su parte, el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, dispone en su enunciado que el recurso de nulidad procederá cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior; y, a su vez, el artículo 477 del Código del trabajo dispone que tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

CUARTO: Que el recurso de nulidad de autos, se funda en dos causales, una en subsidio de la otra, e interpuestas ellas en la forma que se ha señalado en los fundamentos precedentes.

En primer término, es necesario recordar que el recurso de nulidad es asimilable al de casación sustancial, en tanto persigue la invalidación de la sentencia en el evento que se hayan ocasionado perjuicios a un litigante que no los ha provocado, debido a una acción u omisión de particularidades trascendentales en la aplicación de una o más normas legales que origina un resuelvo injustificado, imposible de subsanar por otra vía.

Lo decidido precedentemente se justifica de diversas maneras y



por las razones que se desarrollarán a continuación como si se hubiere deducido sólo una causal, por parecer más adecuado al resolverlo.

QUINTO: Que en cuanto a la primera de las causales alegadas, de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, la errada calificación jurídica de los hechos que se dieran por acreditados en la sentencia, cabe señalar que dicha norma justifica el recurso de nulidad laboral en el caso que sea necesaria una nueva calificación jurídica de los hechos, esto sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

SEXTO: Que, en este sentido, cabe destacar que en el considerando octavo de la sentencia en revisión se asentaron los hechos del juicio y, en especial, la cláusula tácita del contrato en que se establece el bono de instalación que le corresponde al trabajador, mismo cuyo reconocimiento se impugna en este recurso. Por estas razones, se encuentra asentado que en el contrato de trabajo, mediante una cláusula tácita, está incorporado el dicho bono de instalación como un derecho del trabajador, esto acreditado de la forma que en dicho fundamento se explica.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, la sentenciadora concluye que el trabajador detentaba el derecho a percibir el bono de instalación, razón por la que acoge la demanda por esta partida y se dispone su pago.

Así las cosas, es posible advertir que el recurrente en su libelo controvierte conclusiones fácticas de la sentencia, como son aquellas consideradas para entender que se encuentra acreditada la existencia de una cláusula tácita del contrato de trabajo que establece el derecho del trabajador para percibir el bono de instalación, situación que da clara cuenta que no resulta posible acoger el recurso de nulidad que sustancia fundado en esta causal de obliteración establecida en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, desde que la impugnación se sostiene en contra de los hechos asentados en la sentencia y no de la consecuencia jurídica que se hizo derivar de ellos, por lo que, por este capítulo, este recurso no podrá prosperar.

OCTAVO: Que la causal de nulidad alegada en forma subsidiaria



por el recurrente, es aquella prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, respecto de la resolución que condenó en costas a la demandada.

NOVENO: Que el mencionado artículo 477 del Código del Trabajo, establece que el recurso de nulidad tiene lugar contra sentencias definitivas pronunciadas con infracción de ley y que ésta haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

DÉCIMO: Que, como puede advertirse, la resolución objetada por la vía del recurso de nulidad, por la que se condena en costas del demandado, no reviste la naturaleza jurídica de ser una sentencia definitiva desde que no le pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

UNDÉCIMO: Que, de esta forma, al no reunir la resolución que se trata de invalidar la naturaleza de aquellas que permiten esta clase de recurso, el deducido debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en los artículos 477, 478, 479, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el abogado don Alejandro Hernán Azúa Vega, en representación de la demandada ISS Servicios Integrales Ltda., en contra de la sentencia definitiva dictada el veinte octubre de dos mil veinte, declarándose que ésta **NO ES NULA**.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 163-2020 Laboral-Cobranza.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por la Ministro Titular sra. Marilyn Fredes Araya, el Ministro Interino sr. Moisés Pino Pino y la Abogado Integrante sra. Carolina Hermans Bohm. No firma la Abogado Integrante sra. Hermans Bohm, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente. Iquique, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Iquique, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

